

### III. Otras disposiciones

#### PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

**12704** *ORDEN de 21 de abril de 1983 por la que se otorga a «Red de Emisoras de Castilla-La Mancha, S. A.», la concesión definitiva de una emisora de frecuencia modulada en Albacete.*

Ilmos. Sres.: Don Nicolás de Laurentis Vilchez, en representación de la Sociedad mercantil «Red de Emisoras de Castilla-La Mancha, S. A.», solicitó la concesión de una emisora de frecuencia modulada, al amparo del Real Decreto 1433/1979, de 8 de junio, y disposiciones para su desarrollo.

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 1981 se otorgó a «Red de Emisoras de Castilla-La Mancha, S. A.», con carácter provisional, la concesión de una emisora de frecuencia modulada en Albacete.

Habiendo sido aprobado por la Dirección General de Medios de Comunicación Social el correspondiente proyecto técnico de instalaciones, y cumplidos los trámites administrativos previstos en las disposiciones aplicables,

Esta Presidencia del Gobierno ha resuelto:

Uno. Otorgar a «Red de Emisoras de Castilla-La Mancha, Sociedad Anónima», la concesión definitiva para el funcionamiento de una emisora de frecuencia modulada en Albacete, con sujeción a las normas contenidas en la Ley 4/1980, de 10 de enero; en el Real Decreto 1433/1979, de 8 de junio, y en la Orden ministerial de 28 de agosto de 1980.

Dos. Las características técnicas que se asignan a la mencionada emisora, de conformidad con el proyecto técnico aprobado, son las siguientes:

Centro emisor:

Coordenadas geográficas: 38° 59' 44" N, 1° 51' 22" W.  
Emplazamiento: Avenida de la Libertad, 15.  
Cota: 680 metros.  
Clase de emisión: 256KF8EHF.  
Frecuencia: 98,200 MHz.  
Potencia radiada aparente: 700 W.

Antena transmisora:

Tipo de antena: 2 dipolos (omnidireccional).  
Altura sobre el suelo del centro eléctrico de la antena: 45,8 metros.  
Altura efectiva máxima: 0,36 dB (dipolo  $\lambda/2$ ).  
Polarización: Circular.

#### DISPOSICION FINAL

La presente Orden ministerial entrará en vigor el día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.  
Madrid, 21 de abril de 1983.

MOSCOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

Ilmos. Sres. Secretario general de la Presidencia del Gobierno y Director general de Medios de Comunicación Social.

**12705** *RESOLUCION de 8 de marzo de 1983, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta Ejecutiva Nacional del Sindicato Profesional Independiente de Funcionarios de Cultura y Turismo.*

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada en fecha 29 de noviembre de 1982 por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número 510.137, promovido por la Junta Ejecutiva Nacional del Sindicato Profesional e Independiente de Funcionarios de Cultura y Turismo contra el Real Decreto 3065/1978, de 29 de diciembre, por el que se proroga el plazo previsto en el Real Decreto 356/1978 hasta 30 de junio de 1979, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que declarando no haber lugar a su inadmisibilidad y, desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado señor Tercero Alfonsetti en nombre del Sindicato Profesional e Independiente de Cultura y Turismo, contra el Decreto 3065/1978, de 29 de diciembre, debemos declarar y lo declaramos conforme a derecho; sin imposición de costas.»

Lo que comunico a VV. EE.  
Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 8 de marzo de 1983.—El Subsecretario, José María Rodríguez Oliver.

Excmos. Sres. ...

**12706** *RESOLUCION de 17 de marzo de 1983, de la Subsecretaría, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Iglesias Rosende y doña Generosa Noya Expósito.*

Excmos. Sres.: De orden delegada por el excelentísimo señor Ministro se publica, para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos, el fallo de la sentencia dictada con fecha 10 de diciembre de 1982, por la Sala Quinta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo número Ap. 53.842, promovido por don Manuel Iglesias Rosende y doña Generosa Noya Expósito, sobre retasación de los bienes expropiados por Decreto 9 de abril de 1948, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 12 de junio de 1980, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional sobre retasación de una parcela sita en el llamado «Sobre el Agro de Asen», en el Monte Pío de Santiago de Compostela, y en consecuencia confirmamos este particular recurrido de la sentencia apelada; no se hace expresa condena de costas.»

Lo que comunico a VV. EE.  
Dios guarde a VV. EE.

Madrid, 17 de marzo de 1983.—El Subsecretario, José María Rodríguez Oliver.

Excmos. Sres. ...

#### MINISTERIO DE JUSTICIA

**12707** *ORDEN de 18 de marzo de 1983, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 1971, sobre el Registro Civil único de Sevilla.*

Ilmos. Sres.: La conveniencia de establecer el sistema de Registro Civil único en las poblaciones con más de un Juzgado de Distrito fue reconocida por el Preámbulo del Decreto 1138/1969, de 22 de mayo, que reformó parcialmente el reglamento del Registro Civil.

Este sistema se implantó en Sevilla por Orden ministerial de 28 de diciembre de 1971, tomando como modelo las Ordenes de 27 de julio de 1968 y de 11 de octubre de 1971, sobre los Registros Civiles de Barcelona, Bilbao y Valencia.

La experiencia acumulada en el funcionamiento del Servicio en Sevilla hace aconsejable concentrar en el Juzgado de Distrito número 1, todo lo concerniente al Registro Civil de los veintisiete Juzgados de Paz adscritos a los ocho Juzgados de Distrito de la capital, por razones de especialización y de unidad de criterios y para descargar de funciones registrales a los Juzgados de Distrito sin oficina propia de Registro Civil, habida cuenta, además, de que las delimitaciones territoriales en las capitales con varios Juzgados de Distrito quedaron suprimidas a efectos judiciales por el Real Decreto de 11 de noviembre de 1977.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con las Salas de Gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Territorial de Sevilla y del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha

acordado la modificación de la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1971, sobre el Registro Civil de Sevilla, en el sentido siguiente:

Artículo 1.º En el término municipal de Sevilla y en el de los municipios hasta ahora adscritos a los distintos Juzgados de Distrito de esta capital el Registro Civil será único.

Todas las funciones relativas al Registro Civil corresponden al Juzgado de Distrito número 1, cuyas atribuciones respecto del Registro Civil se extenderán a todos los asuntos de tal materia del ámbito territorial de los Juzgados de Distrito de Sevilla, y en la esfera de su propia competencia al Juzgado de Primera Instancia del mismo número.

Art. 2.º Corresponden igualmente al Juzgado de Distrito número 1:

a) La tramitación y resolución de los actos a que se refiere el artículo 17 de la Ley del Registro Civil.

b) El cumplimiento de las funciones propias del Decanato, particularmente el reparto de los asuntos civiles, penales y gubernativos y la legalización de libros de comercio.

Art. 3.º Las plazas de Médicos del Registro Civil en Sevilla serán cuatro, correlativamente numeradas.

El Servicio será equitativamente distribuido entre ellos por este Ministerio, a propuesta del Juez de Primera Instancia, previa audiencia de los interesados e informe del Juez Encargado del Registro. La distribución será revisada con los mismos trámites cuando las circunstancias lo aconsejen.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET.

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.

**12708** ORDEN de 29 de marzo de 1983 por la que se acuerda la creación del Juzgado de Paz de Orríos (Teruel).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la creación del Juzgado de Paz de Orríos, como consecuencia de haberse creado el municipio del mismo nombre, segregado del de Alfambra (Teruel), acordada por Real Decreto del Ministerio de Administración Territorial 2620/1982, de 30 de julio,

Este Ministerio, a tenor de lo establecido en la base primera de la Ley de 19 de julio de 1944, y en el Decreto de 8 de noviembre del mismo año, y de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo General del Poder Judicial, ha acordado crear el Juzgado de Paz de Orríos que dependerá del Juzgado de Distrito de Teruel.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 29 de marzo de 1983.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Secretario técnico de Relaciones con la Administración de Justicia.

## MINISTERIO DE DEFENSA

**12709** ORDEN 111/00862/1983, de 14 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 5 de octubre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Faustino Taboada Pérez, Teniente de la Guardia Civil, retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Faustino Taboada Pérez, Teniente de la Guardia Civil, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministro de Defensa de 28 de abril y 22 de noviembre de 1980, se ha dictado sentencia con fecha 5 de octubre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de don Faustino Taboada Pérez, contra resoluciones del señor Ministro de Defensa de 28 de abril y 22 de noviembre de 1980, denegatorias de la baja por inutilidad física para el servicio de las armas en el Cuerpo de la Guardia Civil, a que las presentes actuaciones se contraen, debemos anular y anulamos como disconformes a derecho, las expresadas resoluciones ministeriales, y en su lugar declaramos el derecho del recurrente a obtener la citada situa-

ción de baja por inutilidad física, con las consecuencias legales correspondientes; sin hacer especial imposición de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 14 de marzo de 1983.—Por delegación, el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavilla Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

**12710** ORDEN 111/00868/1983, de 14 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo, dictada con fecha 24 de noviembre de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don José Galera Ortiz, Capitán de la Guardia Civil, retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, José Galera Ortiz, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 11 de junio y 30 de septiembre de 1981, se ha dictado sentencia con fecha 24 de noviembre de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, desestimando el recurso interpuesto por don José Galera Ortiz contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 11 de junio y 30 de septiembre de 1981 que fijaron su haber pasivo, debemos confirmar y confirmamos los citados actos por ser conformes a derecho; no se hace expresa imposición de las costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 18 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 14 de marzo de 1983.—Por delegación, el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Federico Michavilla Pallarés.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

**12711** ORDEN 111/00932/1983, de 17 de marzo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional, dictada con fecha 5 de julio de 1982, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña Candelaria Otón Pérez, viuda del Sargento de Mar, don Francisco Cano Martínez.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, doña Candelaria Otón Pérez, viuda de Sargento de Mar, quien postula por sí misma, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa, de 11 de julio y 21 de noviembre de 1979, se ha dictado sentencia, con fecha 5 de julio de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada señora Olivares Serrano, en nombre y representación de doña Candelaria Otón Pérez, contra resoluciones del Ministerio de Defensa, de 11 de julio y 21 de noviembre de 1979, que declaramos conformes a Derecho, sin expresa imposición de costas.

En caso que sea esta resolución, remitase testimonio de la misma con el expediente administrativo, al Ministerio de Defensa.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»